

Estrategia Nacional de Drogas 2021-2025

2021-2025
National Drug Strategy



Uruguay
Presidencia



**Junta Nacional
de Drogas**
Salud, Libertad y Solidaridad

Aclaración: Para la redacción de este documento se procuró favorecer el uso de un lenguaje inclusivo, evitando al mismo tiempo la recarga en la lectura producto del uso reiterado de "o/a", "as/os", "los/las" para finalizar palabras que puedan referir al género masculino o femenino. Para ello se optó por la utilización de fórmulas y términos neutros cuando fuera posible o del uso tanto del femenino como masculino en conjunto o alternadamente.

Diseño: IMPO

ISBN: 978-9974-897-25-0

Estrategia Nacional de Drogas 2021-2025



**Junta Nacional
de Drogas - Uruguay**

Salud, Libertad y Solidaridad

Aprobada en Junta Nacional de Drogas el 25 de junio de 2021

Junta Nacional de Drogas (JND)

Dr. Rodrigo Ferrés	Prosecretario de la Presidencia de la República Presidente de la Junta Nacional de Drogas
Dr. Daniel Radío	Secretario General de la Secretaría Nacional de Drogas
Dr. Jorge Chediak	Secretario Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
Dr. Guillermo Maciel	Subsecretario del Ministerio del Interior
Dra. Carolina Ache	Subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores
Cr. Alejandro Irastorza	Subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas
Cnel. (R) Rivera Elgue	Subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional
Lic. Ana Ribeiro	Subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura
Dr. Mario Arizti	Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Lic. José Luis Satdjian	Subsecretario del Ministerio de Salud Pública
Sr. Remo Monzeglio	Subsecretario del Ministerio de Turismo
Sra. Andrea Brugman	Subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social

Índice

Prólogo	9
Introducción	13
Marco institucional de la política de drogas.....	14
Principios	16
Enfoque	17
Componentes.....	19
Fortalecimiento institucional.....	19
Salud integral	23
Mercado: medidas de control y regulación.....	26
Justicia y convivencia	30
Relaciones internacionales y cooperación	33

Prólogo

Salud, Libertad y Solidaridad

Toda política pública lleva implícita una determinada concepción filosófica referida a la persona humana –que es quien debe constituir el fundamento último de cualquier determinación de carácter político– y referida también a su entorno; implica, además, una concepción acerca de la sociedad y del Estado.

La perspectiva que hemos asumido es que la libertad inherente a la persona humana no solamente confiere una condición ontológica diferencial, sino que además condiciona fuertemente la calidad y el cauce por el que habrán de transcurrir las determinaciones políticas, de manera tal que éstas jamás puedan interferir con lo esencial de ser persona evitando incurrir en intervenciones que promuevan la desnaturalización de la condición humana como tal.

Este particular énfasis pretende ser al mismo tiempo el recordatorio y la reivindicación de una cualidad que es esencial a nuestra condición humana: la libre determinación de las personas, pilar fundamental de la vida democrática, que supone nuestra responsabilidad sobre los resultados de nuestros actos y que lleva implícitos ciertos condicionamientos: el respeto a las normas, el deber de tolerancia para con la libertad del prójimo, y la permanente construcción de un marco valórico que sustente la convivencia, que nos impulse a no ser indiferentes y que brinde un contexto propicio para el desarrollo de sentimientos y actitudes solidarias.

En el mundo democrático, para que una línea de desarrollo político sea viable, debe ser el resultado de haber considerado las trayectorias sociopolíticas que se hubieran verificado, ya sea para ratificarlas o para desviar su curso. Y no puede, en cambio, ser la mera consecuencia de una presunta genialidad del pensamiento, elaborado sin tomar en cuenta la historia, los procesos y los aprendizajes institucionales, y mucho menos basándose en mero respaldo casuístico, que generalmente carece de valor estadístico.

La conveniencia de desarrollar políticas de Estado, allí donde sea posible, nos aleja de la necesidad de apelar a mágicas elaboraciones experimentales,

unilaterales y rígidas, que no se hagan cargo de los equilibrios sociopolíticos, de los contextos culturales y de las tendencias históricas; y las descartan, más por inviables que por improductivas.

Al encarar el proceso de elaboración de la Estrategia Nacional de Drogas para un nuevo período de la vida democrática de nuestro país, sentimos que, para hacernos cargo de lo acuciante de la problemática, y sin perjuicio de las modificaciones en los énfasis para la determinación y el logro de los objetivos, debíamos asumir el desafío de prolongar algunas trayectorias que se han venido desarrollando, procurando maximizar su eficiencia, asumiendo nuevos desafíos y corrigiendo o directamente descartando aquellas líneas de acción que implicaran una inversión de recursos que no guardara proporción con el impacto o con la magnitud de cumplimiento de los objetivos propuestos.

Una revisión retrospectiva pone en evidencia que nuestro país ha sido consecuente en el abordaje de la compleja problemática asociada al uso de drogas desde una mirada integral, que siempre ha puesto a la persona –su bienestar, su salud y su libertad– como fundamento último del quehacer institucional.

Pero también hemos entendido que nuestro accionar en esta asignatura debe procurar el mayor respaldo en la evidencia científica disponible e históricamente ha habido una fuerte tendencia a la planificación racional, descartando la improvisación y las prácticas demagógicas complacientes con las demandas puntuales. Sabiendo que estamos enfrentando un panorama complejo resultado de una interacción con las drogas con la que toda la humanidad convive desde hace varios milenios; y con la que, además, continuará conviviendo.

La complejidad de este panorama descarta las respuestas simplistas que apuestan a soluciones utópicas o la posibilidad de un discurso seductor y edulcorado anunciador de la inminencia de un presunto punto final; o el facilismo de un abordaje quirúrgico, presuntamente extirpador de los problemas asociados con el uso de drogas.

Es así como uno de los componentes de esta elaboración fue la información y la consulta; esta estrategia fue elaborada habiendo escuchado a un amplio arcoíris de voces de la sociedad implicadas en el tema. Sin renunciar a la responsabilidad última de quien tiene la potestad institucional, pero habiendo

escuchado y reconocido una muy amplia diversidad de opiniones, respaldadas por trayectorias más o menos consecuentes, con fundamentos y perspectivas diversas, algunas con pretensiones más exclusivistas y, otras, más comprensivas de lo diverso y de lo cambiante del fenómeno.

Cuando los usos de sustancias son problemáticos, generalmente, acaban afectando la salud de las personas y constituyen una patología. Por lo tanto, esto necesariamente supone el involucramiento del Sistema Nacional Integrado de Salud. Esta debe ser la línea de base, nuestro punto de partida, respecto a la atención de los problemas derivados del uso de sustancias. Sin embargo, una perspectiva de salud integral implica, además, el fortalecimiento del cinturón de protección social que necesita del involucramiento y la participación de las instituciones con responsabilidades específicas.

Es así como hemos procurado mirar más allá de la mera afectación de la salud individual y hemos adquirido una perspectiva institucional que supone, entre otras cosas:

- Asumir que se trata de un fenómeno internacional que involucra la seguridad de nuestros pueblos y que supone una lucha frontal contra el tráfico ilícito de sustancias y el lavado de activos, lo cual requiere cooperación e intercambio regional e internacional.
- Participar activamente en el debate internacional relativo a las orientaciones estratégicas y promover el permanente *aggiornamento* y el cambio de paradigma asociado al uso de sustancias.
- Tener presente que para que las decisiones sean auténticamente libres es preciso que sean decisiones informadas, y que esto es particularmente válido para nuestros jóvenes.
- Facilitar el involucramiento del sistema educativo que tiene un rol insustituible en la promoción de trayectorias de vida resilientes y en la prevención de los usos problemáticos de drogas.
- Reconocer que la prevalencia del uso problemático de drogas es mayor en poblaciones privadas de libertad, en situación de calle o sin hogar, con patologías de salud mental, o con trayectorias de institucionalización infantil.

- Tomar en cuenta que, en las mujeres, el relacionamiento con las drogas es aún más estigmatizante y eso dificulta la visibilidad del problema y la búsqueda de ayuda.

Teniendo presentes estos y muchos otros factores, y haciéndonos cargo como país de la magnitud y la especificidad de la problemática, y la implicación de muchas más dimensiones, personales, familiares y comunitarias, Uruguay ha hecho, desde 1988, una apuesta por la interinstitucionalidad, congruente con la naturaleza compleja del fenómeno.

En tanto hay intereses compartidos por múltiples organismos del Estado, se ha optado por la acción conjunta y la ejecución colectiva, que, incorporando iniciativas y recursos de todos ellos, hace confluir estrategias y unifica el accionar para la consecución de los objetivos comunes.

Esto supone haber asumido una racionalidad madura y superadora de la acción institucional individual; de la acción aislada y excluyente, que se basa en una posesión dominante de los recursos o en la presunción de ostentar el monopolio de las competencias, las habilidades o los saberes.

Por el contrario, la estrategia requiere y dispone del compromiso no solo formal, sino también de fondo, de las instituciones coordinando sus esfuerzos y compartiendo sus recursos para constituir una red que se despliega en el territorio. Una red que no sustituye, sino que complementa la atención estrictamente sanitaria y que al igual que esta, se estructura por niveles de atención y tiene objetivos específicos para cada nivel.

Porque responder a las distintas etapas del proceso salud-enfermedad demanda distintos niveles de complejidad y de disposición de recursos. Porque cada persona que tiene un uso problemático de drogas necesita respuestas diferentes, personalizadas, y dispuestas en distintos niveles de atención. Y para poder maximizar los beneficios, que no han de ser instantáneos, es necesario que esta red sea estable, sostenida en el tiempo, y resistente a las oscilaciones o a los vaivenes del quehacer político o institucional en otras áreas.

Dr. Daniel Radío

Secretario General de la
Secretaría Nacional de Drogas

Dr. Rodrigo Ferrés

Prosecretario de la Presidencia de la República
Presidente de la Junta Nacional de Drogas

Introducción

La Estrategia Nacional de Drogas (END) 2021-2025 es el resultado de un amplio proceso de consulta y trabajo interinstitucional con diversos actores vinculados a la temática de drogas. Se realizó en varias etapas integrando los aportes de diversos organismos gubernamentales (ministerios, juntas departamentales y locales de drogas, entre otros), así como de la sociedad civil y la academia, relacionados con el diseño, implementación y/o evaluación de la política de drogas.

En sus estrategias anteriores, Uruguay adoptó una visión integral de las políticas de drogas con perspectiva de Derechos Humanos, desarrolló un modelo de regulación y control de mercados, integrando la perspectiva de gestión de riesgos y reducción de daños. Se recogen las lecciones aprendidas en los trabajos de evaluación de su implementación, realizados por la academia y la Secretaría Nacional de Drogas (SND).

El objetivo de la misma, en su cuarta edición, es renovar el compromiso del Estado uruguayo en asumir y garantizar una respuesta integral a las necesidades del conjunto de la sociedad en materia de drogas, así como favorecer la coordinación de todos los actores involucrados y responsables de su implementación.

En este sentido, se prioriza la salud desde un punto de vista integral con estándares de calidad y respaldo en evidencia científica.

Se expresa el enfoque, principios y lineamientos estratégicos en cinco componentes: Fortalecimiento institucional, Salud integral, Mercado: medidas de control y regulación, Justicia y convivencia, Relaciones internacionales y cooperación.

Se apoya en un Plan de Acción basado en compromisos interinstitucionales, que posibilitan su adecuada implementación mediante la definición de metas e indicadores y su respectivo monitoreo y evaluación.

A nivel internacional, se estructura a partir de los lineamientos y compromisos acordados en las diferentes instancias en las que participa el país.

Marco institucional de la política de drogas

La política de drogas en Uruguay tiene una larga trayectoria, permitiendo contar con un rico acumulado de aprendizajes y bagajes, tanto a nivel institucional como técnico.

La Junta Nacional de Drogas (JND) es el organismo rector en la materia, con una institucionalidad capaz de promover el consenso al más alto nivel y de brindar garantía y coherencia en su aplicación interinstitucional.

Tiene su origen en la Junta Nacional de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y Uso Abusivo de Drogas, creada en el ámbito de la Presidencia de la República por Decreto 463/988, el 13 de julio de 1988. La denominación Junta Nacional de Drogas y la creación de la Secretaría Nacional de Drogas fueron establecidas el 28 de octubre de 1999 por Decreto 346/999. Con el Decreto 170/2000 de 7 de junio de 2000 se definen sus cometidos e integración institucional. Actualmente, es presidida por el prosecretario de la Presidencia de la República y está integrada por nueve subsecretarios de los ministerios con competencia en la materia, el secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas y el secretario nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Misión JND:

- Establecer las directrices de la política de drogas garantizando la ejecución de las acciones que competen a los diferentes organismos del Estado.

Visión JND:

- Consolidarse como ámbito político de más alto nivel gubernamental para la articulación interinstitucional de la implementación de la política nacional de drogas.

En todo el país existen Juntas Departamentales de Drogas (JDD) y Juntas Locales de Drogas (JLD), ámbitos interinstitucionales, para atender las diversas

realidades en territorio. Creadas por Decreto 84/2010, el 25 de febrero de 2010, tuvieron una adecuación de su marco jurídico el 4 de diciembre de 2012, mediante el Decreto 387/012.

La SND es la dependencia gubernamental especializada en materia de drogas, con el cometido de brindar apoyo y asesoramiento técnico de alta calidad en el diseño, implementación y evaluación de la política, involucrando la promoción de su ejecución mediante articulación interinstitucional.

Principios

- **Derechos Humanos.** Integración de principios e instrumentos de Derechos Humanos en la política de drogas. Respeto de los derechos y garantías en todas las dimensiones.
- **Desarrollo con equidad.** Compromiso con el desarrollo y dignidad humana, con énfasis en poblaciones vulneradas. Inclusión transversal de perspectiva de género.
- **Integralidad y equilibrio.** Abordaje complejo, multidimensional y transversal.
- **Corresponsabilidad.** Fortalecimiento de la estrategia en drogas mediante cooperación en los espacios multilaterales y a nivel global.
- **Democracia.** Participación activa de la comunidad y sociedad civil en la construcción de la política, así como profundización del debate en drogas integrando todas las miradas.
- **Evidencia científica.** Intervenciones basadas en evidencia científica hacia la calidad, eficiencia y sostenibilidad de las acciones
- **Transparencia.** Disponibilidad de información pública y rendición de cuentas.

Enfoque

La END 2021-2025 concibe la temática de las drogas como un fenómeno complejo y dinámico, que involucra diversas áreas y dimensiones respecto a su naturaleza, causas, desarrollo y abordaje. Requiere del diseño de respuestas a medida y lo suficientemente abarcativas de las necesidades del conjunto de la sociedad.

Un enfoque integral, equilibrado y multidisciplinario centrado en las personas y comunidades y sus vínculos, encuentra en el modelo de reducción de riesgos y daños una respuesta comprehensiva de las diferentes dimensiones del fenómeno. Permite el diseño de estrategias para anticipar riesgos, prevenirlos y disminuirlos mediante objetivos que pueden ser de corto, mediano y/o largo plazo, admitiendo diversidad de intervenciones. Abarca desde la regulación de mercados, hasta la atención de la salud individual, al centrarse en el tipo de vínculo que las personas establecen con las drogas. En este sentido, el modelo de reducción de riesgos y daños incluye la posibilidad de plantear la abstinencia como objetivo terapéutico.

Su abordaje implica colaboración y complementación intersectorial tanto en el ámbito nacional, departamental, local como internacional, para integrar las diferentes dimensiones del fenómeno, abarcando la esfera sanitaria, social, jurídica, económica, cultural y ambiental.

Se busca garantizar el acceso a la salud en forma universal desde un punto de vista integral y multimodal, basado en el reconocimiento de las diferentes necesidades que se derivan de los usos problemáticos, no problemáticos y medicinales.

En este sentido, se promueve una concepción de convivencia basada en la aceptación de la diversidad y superación de estigmas sociales, que requiere de un conjunto de respuestas transversales y coordinadas, poniendo el énfasis en las necesidades de poblaciones vulneradas.

Se promueve un modelo de gobernanza de las políticas de drogas que integre, de forma equilibrada, los intereses y aportes del Estado, la sociedad civil y

el sector privado, articulando e imbricando esta política en los procesos de desarrollo económico, social y cultural de la sociedad.

Las acciones se desarrollan desde un concepto de territorialidad, entendido como el espacio vital en que los sujetos desarrollan procesos sociales de convivencia, otorgando lugar y sentido a la vida cotidiana y configurando oportunidades de contribución al desarrollo colectivo local. Por lo tanto, se hace imprescindible el protagonismo de los actores locales, tales como gobiernos departamentales y municipios, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y empresas locales, entre otros, a través de mecanismos de planificación y participación en su implementación.

Asimismo, la END incluye en sus componentes la formulación de respuestas frente a situaciones emergentes, tales como emergencias de tipo sanitario y/o social.

Componentes

Fortalecimiento institucional

La amplitud y complejidad de los aspectos abordados en las políticas de drogas a nivel nacional exigen la participación activa y coordinada de múltiples actores, con competencias, vocación y recursos desplegados en todo el país.

En este sentido, el rol de la JND, como rectora nacional de las políticas y articuladora de la red interinstitucional para la implementación de la END, adquiere singular importancia para la consecución exitosa de resultados. Ello implica profundizar los procesos de construcción, implementación y rectoría de la política, promoviendo nuevas instancias interministeriales de diálogo, diseño y coordinación.

La coordinación y articulación de la política de drogas requiere del fortalecimiento de la SND como órgano técnico de la JND, así como de las JDD y JLD, actualizando su marco institucional y legal, así como sus competencias y cometidos para el cumplimiento efectivo de su rol.

Además de la administración central, las instituciones relevantes y decisivas para el éxito de las políticas abarcan al Poder Legislativo y Judicial, gobiernos departamentales y locales, sistema educativo, red de servicios sanitarios, organizaciones empresariales, sindicales y OSC, entre otras significativas. Estas constituyen la red social que dará amplio sustento a las políticas desde una perspectiva de diálogo, responsabilidad compartida y gobernanza.

La estrategia se orienta al desarrollo efectivo y potenciación de líneas de acción transversales a todos los campos de la política, en materia de investigación, comunicación, formación, descentralización y evaluación, consolidando los procesos de implementación del ciclo de políticas a partir de la evidencia científica y la calidad de las intervenciones. El fortalecimiento institucional del Fondo de Bienes Decomisados (FBD), la Red Nacional de Drogas (RENADRO)¹ y el

1 RENADRO (Red Nacional de Drogas) se define como el conjunto de iniciativas de sensibilización, promoción de salud, prevención, atención, tratamiento e inserción social de los usuarios de drogas. Su conformación se concibe de manera integral incluyendo las prestaciones públicas y privadas en el marco del SNIS. A nivel público, las prestaciones en drogas se han complementado

Observatorio Uruguayo de Drogas (OUD) constituyen, asimismo, lineamientos de acción centrales de la END para la consolidación de las respuestas técnicas en estas áreas específicas.

Lineamientos estratégicos

1. Fortalecer los procesos de diseño de políticas y rol de rectoría de la JND en política de drogas, profundizando la labor interinstitucional de los ministerios integrantes y promoviendo, al más alto nivel, la articulación de acciones con otras instituciones públicas relevantes para su implementación.
2. Desarrollar líneas de trabajo conjunto y fortalecimiento de los múltiples actores involucrados en la implementación de la END, agencias estatales, gobiernos departamentales y locales, instituciones educativas, OSC, sindicatos de trabajadores, entre otros.
3. Fortalecer la RENADRO, contemplando aspectos normativos y reglamentarios vigentes en la materia, para asegurar universalidad, accesibilidad y articulación interinstitucional entre los servicios.
4. Consolidar el marco institucional y dotación de recursos de la SND para el mejor cumplimiento de sus cometidos de asesoría, articulación y supervisión de las acciones implementadas, a través de los siguientes ejes transversales:

4.1. Comunicación

Difundir el enfoque amplio de las políticas de drogas desarrollando procesos de comunicación social al público en general y diversas poblaciones específicas. Se fundamenta en la asertividad, la escucha social y la personalización de los contenidos.

Promover el compromiso y la acción solidaria de los diversos actores, profundizando los niveles de información y comprensión

a través de un fideicomiso de administración, que permite el desarrollo sostenido de un modelo de atención y tratamiento, integrado por una red de dispositivos diferenciados en los tres niveles de atención, que tienen como cometido garantizar el acceso a la salud integral de las personas con uso problemático de drogas.

ciudadana sobre la temática, programas de prevención, tratamiento e inserción social, así como difundiendo la evidencia científica generada en este ámbito.

4.2. Investigación

Generar evidencia científica para el diseño e implementación de políticas. Privilegiar la vigilancia epidemiológica realizada por el OUD dentro de sus funciones, profundizando su articulación con otras entidades de la esfera pública y privada, organismos internacionales y sociedad civil, para el desarrollo de investigaciones y estudios.

Formalizar, desarrollar e impulsar los sistemas de información en drogas. El Sistema de Alerta Temprana (SAT) constituye una herramienta clave para el monitoreo de consumos de alto riesgo, adulteraciones y detección de nuevas sustancias psicoactivas en tiempo real. Asimismo, el sistema de registro en centros de tratamiento, Tratamiento. Registra, constituye una fuente de información fiable, precisa y actualizada de la situación de la oferta y demanda de tratamiento.

4.3. Monitoreo y evaluación

Fortalecer los mecanismos de planificación, monitoreo y evaluación científica de las políticas de drogas en sus programas, proyectos, servicios y acciones, en tanto generadores de evidencia sustantiva para su gestión y mejora continua; en coordinación y cooperación con los organismos nacionales e internacionales en la materia.

Profundizar en la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad para asegurar el cumplimiento de parámetros internacionales en el abordaje de la temática de drogas, así como la eficiencia y eficacia del trabajo en red.

4.4. Descentralización

Profundizar la descentralización y territorialización en la política de drogas, por medio del fortalecimiento de las JDD y el impulso a la creación de JLD. Facilitar la articulación de acciones y recursos entre los tres niveles de gobierno.

Promover y apoyar la formulación y ejecución de planes departamentales, basados en diagnósticos locales que, por medio de procesos participativos, diseñen intervenciones que involucren a las comunidades.

4.5. Formación

Promover acciones de formación y capacitación dirigidas a profesionales, técnicos y otros perfiles que se desempeñan en los distintos campos temáticos implicados, articulando un conjunto coherente de acciones interinstitucionales, que fomente la trasmisión de conocimientos, intercambio, análisis de experiencias, buenas prácticas y el desarrollo de un pensamiento crítico e innovador.

Desarrollar estrategias en el ámbito universitario y/o terciario para generar ofertas formativas especializadas dirigidas a profesionales que se desempeñan en la temática a nivel de grado y posgrado.

Ampliar las acciones orientadas a la inserción curricular de la temática de drogas en la formación profesional, básica y permanente, en ámbitos estratégicos tales como educación, social, salud, justicia y seguridad pública.

4.6. Fondo de Bienes Decomisados

Fortalecer el marco jurídico-institucional del Fondo de Bienes Decomisados (FBD), consolidando los procesos de administración, recuperación y liquidación de bienes y la transparencia en los procesos de adjudicación de recursos con destino a la política de drogas.

Consolidar el trabajo en conjunto con las instituciones vinculadas en el proceso de administración y recuperación de bienes y formalizar los compromisos institucionales para el desarrollo y fortalecimiento del sistema de información y administración de bienes.

Salud integral

El uso de drogas se concibe desde su complejidad y dinamismo, considerando la promoción de salud, prevención, tratamiento e integración social de las personas con uso problemático de drogas y sus comunidades como componentes esenciales. En ese sentido, la política en materia de drogas se enmarca en la perspectiva de salud pública e incluye factores sociales, educativos, sanitarios, económicos y políticos, entre otros.

La dimensión social considera la expresión de los problemas de drogas en los diferentes sectores sociales, la desigualdad de género y su manifestación en los distintos territorios y comunidades.

Esta estrategia se orienta al desarrollo de un sistema integral de promoción de salud y prevención, así como al logro de la integralidad en el sistema de atención y tratamiento en drogas. Esto implica avanzar, como complemento al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y políticas de protección social, en la rectoría de las diversas prestaciones, así como en el fortalecimiento interinstitucional de la RENADRO.

Se hace especial énfasis en mejorar la accesibilidad de las personas a las prestaciones desde una perspectiva de género e intersecciones (cruzamiento con otras categorías de análisis como ascendencia étnico-racial, nivel socioeconómico, diversidad sexual, generaciones, entre otras), así como en la cohesión de las políticas sectoriales y su eficiencia. En este marco, se trata de crear condiciones favorables para la disponibilidad, accesibilidad, sostenibilidad y calidad de las diferentes intervenciones de atención, tratamiento² e integración social adaptadas a las necesidades y características de las personas con uso problemático de drogas y sus comunidades.

El abordaje del uso problemático de drogas parte de una concepción integral que comprende diversos enfoques y disciplinas con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho a la salud. Incluye desde propuestas comunitarias hasta propuestas clínicas hospitalarias, considerando intervenciones individuales, grupales, familiares y multifamiliares.

² Definidas en el Decreto 274/2013 de 3 de setiembre de 2013.

Para ello se requiere una detección precoz y prevención del consumo de mayor riesgo, la promoción de competencias psicosociales, así como de conductas y hábitos de vida saludables incluyendo aspectos como la práctica del deporte, la actividad física y la recreación.

Desde una concepción de equidad social garantizar atención, tratamiento y acceso a prestaciones sociales de calidad identificando y desarrollando estrategias personalizadas, tanto a nivel individual, como colectivo y en particular grupos vulnerables que requieren abordajes especializados: población adolescente, personas privadas de libertad, personas con patologías asociadas, entre otros.

En población adolescente, las condiciones biológicas, relacionales, ambientales y de aprendizaje propias de esta etapa, tienen un impacto diferencial, lo cual requiere de un abordaje específico desde la prevención hasta el tratamiento especializado. Se enfoca prioritariamente en acciones tendientes a aumentar la percepción de riesgo y retrasar la edad de inicio del consumo de drogas.

Se busca garantizar el ejercicio del derecho al goce de la salud en sus múltiples dimensiones, en un contexto de integración social de las personas y comunidades, con miras a la equidad social. Abarca el acceso equitativo a la salud, educación, empleo e integración social, en forma coordinada, buscando superar las desventajas existentes en los grupos poblacionales con derechos vulnerados.

La complejidad de los procesos de salud-enfermedad-atención requiere de modelos relacionales que permitan comprender y abordar simultáneamente múltiples dimensiones. En este marco, el Estado tiene el rol de crear las condiciones que garanticen el pleno ejercicio de los derechos fundamentales.

Asimismo, se promueve la participación activa de la sociedad civil y la comunidad con la finalidad de propiciar el diálogo y la construcción de una agenda común.

Lineamientos estratégicos

1. Desarrollar un sistema integral de prevención, abarcando estrategias de influencia, de desarrollo de competencias, de control y protección

y ambientales, implementando programas de prevención universal, selectiva e indicada, en los ámbitos educativo, comunitario, familiar, laboral, deportivo y cultural. En coordinación con actores clave, implementar proyectos con énfasis en población adolescente y otros subgrupos poblacionales.

2. Desarrollar un sistema integral de atención y tratamiento en drogas que integre al conjunto de actores sociales que ejercen diversas prestaciones en drogas, tales como OSC, organismos públicos, ámbito privado, entre otros; fortaleciendo los mecanismos de rectoría de las mismas.
3. Implementar el diseño, ejecución y coordinación interinstitucional de planes nacionales en relación a mandatos específicos de la ley sobre el abordaje de sustancias: tabaco, cannabis, alcohol, psicofármacos y otras drogas, generando acciones de articulación con el Plan Nacional de Salud Mental 2020-2027.
4. Desarrollar e implementar sistemas de gestión de la calidad y mejora continua en el sistema de prevención y en el sistema de atención y tratamiento.
5. Posicionar a la RENADRO como sistema modelo en atención en drogas en el ámbito público, mediante dispositivos de información y derivación, ambulatorios, residenciales, casas de medio camino, comunitarios; y estrategias basadas en evidencia dirigidas a las necesidades de poblaciones específicas: mujeres, mujeres y varones con hijos, hijos de personas consumidoras, familias, personas privadas de libertad, entre otros.
6. Fortalecer las acciones de integración social orientadas a la reducción de las vulnerabilidades asociadas al consumo problemático de drogas mediante el acceso a programas de protección social, específicamente en educación, cultura, vivienda, salud adaptadas a las posibilidades y necesidades de las personas y sus comunidades, en coordinación con políticas sectoriales.

Mercado: medidas de control y regulación

Los mercados legales del alcohol, tabaco, cannabis y psicofármacos configuran oportunidades para el desarrollo de políticas orientadas a la promoción de salud y cuidado de las personas y comunidades. El contexto legal de su producción, distribución, comunicación, venta y consumo, otorga al Estado instrumentos de diseño, supervisión y control, facilitando una intervención positiva, la cual, partiendo de un concepto de derechos, es capaz de construir espacios de información, reflexión y protección de las personas.

La END pretende avanzar en el desarrollo de los componentes estratégicos de cada marco regulatorio, así como en su actualización.

El modelo de regulación del mercado de cannabis implica su revisión organizacional para ampliar el espacio del mercado legal, impactando sustantivamente en el mercado ilícito, en base a la protección de derechos y salud de los usuarios, así como fortalecer los programas de información y prevención asociados a esta política.

Se requiere del fortalecimiento institucional del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), así como de los roles y competencias de las instituciones que lo componen, para desarrollar el mercado legal a nivel local e internacional, a través de componentes industriales y medicinales con una producción de calidad, acompañada por el desarrollo de investigación.

La legislación sobre el mercado de bebidas alcohólicas abarca la regulación de la publicidad, promoción, expendio y fiscalización, implementando las acciones de regulación y control, así como la prevención del uso problemático.

Respecto a la política de control de tabaco, se requiere incrementar la información pública sobre los efectos nocivos del consumo y enfermedades asociadas, así como la ampliación y máximo aprovechamiento de los programas y servicios de cesación tabáquica disponibles en el marco del SNIS.

Los componentes estratégicos de estos tres marcos regulatorios requieren mayores niveles de articulación y sinergia, de modo de ser unificados en la perspectiva de derechos, en la preservación de la libertad individual y de terceros, y para el logro de objetivos sanitarios y sociales. Asimismo, implica el

fortalecimiento y trabajo articulado de los organismos de control y fiscalización, así como de la sociedad civil.

El mercado de psicofármacos requiere ser focalizado hacia un mayor control que prevenga su uso abusivo, así como su desvío hacia el mercado ilícito.

Las acciones dirigidas a prevenir, detectar y sancionar el lavado de activos constituyen un componente central de las políticas de drogas. La privación de los beneficios del negocio ilícito impacta fuertemente en las organizaciones criminales, al tiempo que protege el mercado financiero e inhibe el desarrollo del fenómeno de la corrupción. En este sentido es necesario el fortalecimiento del FBD para la gestión de los mecanismos de administración, recuperación y liquidación de bienes y la transparencia en los procesos de adjudicación de estos recursos con destino a las políticas de prevención, tratamiento y control del narcotráfico.

En cumplimiento de los acuerdos internacionales se mantendrán los mecanismos dirigidos a prevenir y sancionar el desvío de precursores y sustancias químicas utilizadas para la producción ilícita de drogas.

Por otra parte, se garantizará la disponibilidad de las sustancias controladas para usos terapéuticos y científicos.

La END se propone desarrollar un enfoque integral y equilibrado de las políticas policiales de prevención, investigación policial y represión, con estricto apego a los Derechos Humanos, procurando un impacto efectivo, global y permanente sobre las organizaciones de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, corrupción y crimen organizado.

Se pone especial énfasis en las acciones para combatir la asociación de estos delitos de drogas con el tráfico y trata de personas, la explotación sexual y tráfico de armas, promoviendo la protección de las personas con mayor vulnerabilidad social.

Desde un concepto integral de política criminal la atención de la problemática carcelaria es priorizada como contribución a la implementación de procesos efectivos de ejercicio de derechos y oportunidades de reinserción social para las personas privadas de libertad.

Lineamientos estratégicos

1. Profundizar el monitoreo y evaluación de las políticas de regulación de mercados mediante un sistema de indicadores validados, consensuados, estandarizados, comparables y confiables.
2. Reforzar los mecanismos de control y fiscalización de la producción y el expendio de sustancias psicoactivas en el marco de modelos de regulación de mercados como alcohol, cannabis, tabaco y psicofármacos, fortaleciendo las instituciones con competencia en la materia.
3. Fomentar producción de cannabis medicinal e industrial, potenciando el mercado local e internacional con productos de calidad y desarrollo de evidencia científica.
4. Garantizar la accesibilidad, disponibilidad y uso de las sustancias fiscalizadas con fines médicos e investigación científica, incluyendo la actualización de la normativa.
5. Fortalecer las medidas de control establecidas para prevenir el desvío de precursores y sustancias químicas del mercado legal hacia la producción ilícita de drogas.
6. Profundizar las medidas necesarias para controlar el mercado de productos farmacéuticos, su comercialización ilegal y la utilización en la producción ilícita de sustancias psicoactivas.
7. Profundizar las políticas de prevención y represión del lavado de activos incluyendo la investigación patrimonial, incautación y decomiso de los bienes de las organizaciones delictivas.
8. Asegurar la aplicación de medidas de prevención y sanción de la corrupción, en particular, de las personas que desempeñen funciones públicas.
9. Fortalecer las políticas de prevención, interdicción y represión al tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos, especialmente la delincuencia organizada, los delitos de corrupción pública, lavado de activos, tráfico de armas y de personas.

10. Definir mecanismos de consulta, asesoramiento, capacitación y cooperación en la implementación de las políticas de drogas con el Poder Judicial, el Ministerio Público y Fiscal, Ministerio del Interior, ámbitos académicos y otras organizaciones vinculadas al Sistema de Justicia, para fortalecer los sistemas de información.

Justicia y convivencia

La justicia se concibe desde la perspectiva de Derechos Humanos, la protección de las personas y sus comunidades en referencia al acceso a las oportunidades y en la distribución desigual de las sanciones derivadas de la aplicación de las políticas de drogas. Es necesario contemplar las condiciones de desventaja social de grupos sociales vulnerables en su vinculación con actividades relacionadas al microtráfico de drogas. En zonas urbanas donde hay mayor marginalidad, mayor violencia estructural, redes incipientes o consolidadas de actividades ilícitas, la economía ilícita de drogas encuentra un ambiente favorable para asentarse.

La concepción de convivencia refiere a la calidad de las relaciones interpersonales, así como a la aceptación del otro en tanto ser diferente, promoviendo la construcción de acuerdos en la diversidad.

En esta perspectiva, las políticas se orientan a deconstruir estereotipos y representaciones sociales estigmatizantes, favorecer la tolerancia y contribuir a eliminar la discriminación de las personas usuarias de drogas. En este sentido, la regulación del mercado de cannabis contribuye a mejorar la seguridad y convivencia entre los ciudadanos, al disminuir el número de personas vinculadas al mercado ilícito, así como su criminalización y estigmatización. Este concepto se retroalimenta con la concepción de convivencia social, que se obtiene del entramado social y relacional, mediado por aspectos políticos, religiosos, culturales, uso del espacio público, entre otros, que inciden en la construcción de ciudadanía y comunidad.

Se entiende pertinente promover y fortalecer acciones vinculadas a la integración social de colectivos en situaciones de vulnerabilidad social, desde una perspectiva interseccional haciendo énfasis en las personas formalizadas, procesadas y privadas de libertad por delitos de estupefacientes, personas en situación de calle, personas migrantes y con problemáticas emergentes.

La evidencia muestra la estrecha relación entre personas en situación de calle y consumo de sustancias. Identificar esta trama social supone transformaciones subjetivas y colectivas superando la dinámica tutelar, teniendo en cuenta que la

situación de calle implica un conjunto de múltiples factores a problematizar, como son las desigualdades jurídicas, desafiliación social, forzada movilidad, entre otras.

La fragilidad de las comunidades afectadas por el tráfico ilícito de drogas, en particular el microtráfico, exige la implementación de programas de promoción y desarrollo social y económico. El modelo del Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (DAIS) de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD-OEA) constituye una referencia para dar respuesta a esta problemática.

Se evidencian diferencias significativas entre las personas procesadas por delitos de estupefacientes, contando con un porcentaje muy superior en mujeres respecto a varones en todos los años registrados.³ Se ha determinado que los grupos más vulnerables están sobrerrepresentados en las cárceles.

Se señalan como líneas de acción prioritarias fortalecer procesos institucionales que promuevan la tolerancia y la convivencia pacífica, en articulación con las comunidades en todos los niveles territoriales.

Lineamientos estratégicos

1. Generar conocimiento y promover el intercambio de buenas prácticas en esta área con el fin de fortalecer el diseño e implementación de programas basados en evidencia científica.
2. Profundizar en los procesos de las personas en situación de calle en referencia a sus condiciones de la vida cotidiana, pautas de movilidad, formas de habitar los espacios públicos y la convivencia, teniendo en cuenta la alta prevalencia de problemáticas de consumo y salud mental.
3. Desarrollar estrategias y programas de intervención específicas en comunidades identificadas como de mayor riesgo ante la cultura de la ilegalidad y la exposición a la comisión de delitos de microtráfico de drogas.
4. Fortalecer los servicios existentes en contextos vulnerables, así como

³ JND - OUD 2019. Monitoreo y evaluación de la Ley 19.172: Aplicación justa de la Ley y Seguridad y Convivencia.

- incorporar en los programas y redes que están presentes en los territorios la lectura particular del impacto de la privación de libertad de familiares y/o referentes significativos en la vida de las niñas, niños y adolescentes, de tal manera que se incluya esta dimensión en el abordaje integral.
5. Sensibilizar y capacitar a los distintos actores del sistema de justicia (jueces, policía, entre otros), la academia, servicios de salud y organizaciones comunitarias con información actualizada y buenas prácticas sobre el abordaje del uso problemático de drogas desde la cultura de la tolerancia y la convivencia pacífica.
 6. Promover medidas alternativas a la privación de libertad y libertades anticipadas, desarrollando planes y programas de integración sociolaboral y educativa, que den cuenta de las poblaciones más vulnerables que se involucran en el tráfico de drogas, en particular las mujeres vinculadas al microtráfico.

Relaciones internacionales y cooperación

La política exterior del país en materia de drogas, se basa en los principios de:

- Respeto y promoción del Estado de Derecho como garante de los derechos individuales y colectivos.
- Igualdad jurídica entre los Estados como base del principio de responsabilidad común y compartida.
- Autodeterminación de los pueblos asociada a la vigencia del Estado de Derecho, la soberanía e integridad territorial de los Estados y la no injerencia en asuntos internos.
- Protección del medio ambiente y respeto de los Derechos Humanos como fin último y fundamento de una visión integral de la política de drogas.
- Preservación de la paz y proscripción del uso o amenaza de la fuerza.
- Solución pacífica de controversias como herramienta central de mantenimiento de la paz y convivencia entre las naciones.
- Multilateralismo y cooperación como herramientas fundamentales para atender la globalidad del problema mundial de las drogas.
- Jerarquización del Sistema de Naciones Unidas como ámbito generador de paz, diálogo, consensos y respuestas conjuntas que dan cuenta de la unidad en la diversidad y respeto del derecho Internacional como garante y marco de referencia de las relaciones entre los Estados.

El país renueva su compromiso en fortalecer la comunicación, la colaboración, la cooperación y el intercambio de información con terceros países con el propósito de abordar los efectos negativos en materia drogas a nivel mundial, con un enfoque integral, equilibrado, interdisciplinario y basado en evidencia científica.

Se continúa promoviendo un diálogo abierto y continuo con los diferentes Estados, agencias y organismos internacionales, con una participación activa en los ámbitos regionales y mundiales, promoviendo un debate abierto en el MERCOSUR, GRULAC, CICAD-OEA, CELAC-UE y UNODC, así como en las

diversas agencias integrantes del Sistema de Naciones Unidas, como el Consejo de Derechos Humanos, OMS-OPS, ONUSIDA, y ONUMUJERES, sin perjuicio de otros.

Asimismo, se fortalecerá la Cooperación Sur-Sur y triangular, así como la cooperación bilateral para el abordaje específico de los territorios de frontera.

En el marco de eventuales emergencias sanitarias a nivel regional y mundial, se favorecerá el intercambio de conocimientos y experiencias, estableciendo espacios de cooperación vinculados al abordaje y actuación de los diferentes actores en la temática.

Lineamientos estratégicos

1. Coordinar e impulsar la participación política y técnica de Uruguay en el ámbito internacional en materia de drogas. Sostener la participación activa del país en las diferentes instancias y organismos de cooperación multilateral y regional a fin de fortalecer la cooperación internacional. Mantener y profundizar acuerdos y programas de cooperación internacional con terceros países, para desarrollar la cooperación jurídica, asistencia técnica y operativa internacional en materia de drogas.
2. Estimular la integración efectiva de los Derechos Humanos al marco internacional de las políticas de drogas.
3. Continuar promoviendo el debate y la revisión de las políticas para abordar la complejidad del uso problemático de drogas.
4. Promover y profundizar la cooperación internacional en materia de cannabis medicinal y cáñamo industrial.
5. Profundizar la cooperación bilateral para la generación de acciones en zonas de frontera. Intensificar la Cooperación Sur-Sur y triangular entre los diferentes actores vinculados a la temática, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.

Tabla 1: Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)-
Organización de las Naciones Unidas

ODS	Componentes de la END 2021 - 2025				
	Fortalecimiento Institucional	Salud Integral	Mercado: medidas de control y regulación	Justicia y Convivencia	Relaciones Internacionales y Cooperación
ODS 3: Salud y bienestar		●	●	●	
ODS 4: Educación de calidad		●			
ODS 5: Igualdad de género	●	●	●	●	●
ODS 10: Reducción de desigualdades		●	●	●	
ODS 16: Paz y justicia en las instituciones	●		●	●	●
ODS 17: Alianzas para lograr objetivos	●	●	●	●	●

Tabla 2: Contribución a las recomendaciones de la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas - UNGASS 2016

Recomendaciones UNGASS	Componentes de la END 2021 - 2025				
	Fortalecimiento Institucional	Salud Integral	Mercado: medidas de control y regulación	Justicia y Convivencia	Relaciones Internacionales y Cooperación
1. Reducción demanda y medidas conexas	●	●	●	●	
2. Disponibilidad de sustancias			●		
3. Reducción oferta y medidas conexas	●		●	●	
4. Intersectorialidad	●	●	●	●	●
5. Fiscalización internacional			●		●
6. Cooperación internacional	●	●	●		●

2021-2025 National Drug Strategy



**Junta Nacional
de Drogas - Uruguay**

Salud, Libertad y Solidaridad

Approved by the National Drug Council on June 25, 2021

National Drug Council of Uruguay

Mr. Rodrigo Ferrés (L.D.)	Assistant Secretary of the President's Office President of the National Drug Council
Mr. Daniel Radío (M.D.)	Secretary General of the National Drug Council
Mr. Jorge Chediak (L.D.)	National Secretary for Prevention and Fight against Money Laundering and Terrorism Financing
Mr. Guillermo Maciel (L.D.)	Undersecretary of the Ministry of Internal Affairs
Ms. Carolina Ache (L.D.)	Undersecretary of the Ministry of Foreign Affairs
Mr. Alejandro Irastorza (C.P.A)	Undersecretary of the Ministry of Economy and Finance
Col. (R) Mr. Rivera Elgue	Undersecretary of the Ministry of National Defense
Ms. Ana Ribeiro (B.A.)	Undersecretary of the Ministry of Education and Culture
Mr. Mario Arizti (L.D.)	Undersecretary of the Ministry of Labor and Social Security
Mr. José Luis Satdjian (B.A.)	Undersecretary of the Ministry of Public Health
Mr. Remo Monzeglio	Undersecretary of the Ministry of Tourism
Ms. Andrea Brugman	Undersecretary of the Ministry of Social Development

Contents

Prologue	43
Introduction.....	47
Institutional framework for the drug policy.....	48
Principles.....	50
Approach.....	51
Components.....	53
Institutional strengthening.....	53
Integral health	57
Market: control and regulation measures	60
Justice and coexistence	63
International relations and cooperation.....	66

Prologue

Health, Freedom and Solidarity

Every public policy necessarily implies a specific philosophical conception related to both the human being –who, in the end, sets the bases for any and all decisions of a political nature– and the context, apart from indirectly expressing a concept of society and State.

In our opinion, the freedom inherent to a human being not only conveys a differential ontological condition; it also significantly conditions the determinacy, and the path, of political definitions that never interfere with the essence of each individual, while avoiding interventions that denaturalize the human condition as such.

This particular focus is intended both by way of reminder and as a vindication of a quality indispensable for our human condition and considered a primary foundation of democratic life, that is, every individual's self-determination. This entails our own responsibility for our actions' outcome, and comprises specific conditions like the observance of rules, the obligation of being tolerant of one another's freedom, and the ongoing construction of a framework of values for supporting coexistence and demoting aloofness, while also providing an adequate context to manifest feelings and supportive attitudes.

Amidst the democratic world, feasible political development lines must result from considering the verification of socio-political processes in order to ratify them, or otherwise redirect them. They must not result simply from alleged brilliant thinking pursued apart from history and institutional processes and lessons, and much less from merely casuistic foundations often lacking statistical value.

Developing State policies wherever possible saves us from having to resort to unilateral and strict constructions as much magical as they are experimental –and distant from socio-political balances, cultural contexts and historical trends–, which end up discarded due more to their impracticality than for the fact of proving non-productive.

To face the making process of a National Drug Strategy for a new period of democracy in Uruguay, we believe that taking the reins of such an overwhelming predicament –and without prejudice to varied focuses on objectives defined and attained– involves the challenge of extending processes already under development and maximizing their effectiveness. And as we encounter renewed challenges, we should correct, or directly discard, some lines of action that imply investments not proportional to the effects achieved, or to the degree of fulfillment of goals established.

Retrospective reviews show Uruguay's consistent approach towards the complex and difficult situation inherent to drug use seen as a whole, where each individual is the final aim of institutional concerns, including everyone's welfare, health and freedom.

Nevertheless, we deem that our actions in this regard should seek as much support as possible from all scientific evidence available, aligned with the strong trend historically based on rational planning, and away from possible improvisational and demagogic practices indulgent with particular demands. We are well aware of the complicated scenario we face, that is, the interaction between humans and drugs that humankind has confronted for millennia, and with which it will continue to deal.

This intricate outlook rules out simplistic answers oriented at utopian solutions, as well as seductive and sweetened discourses announcing an imminent finale, or the facile and surgically precise approach to supposedly root out drug-related problems.

Consequently, this proposal comprises data, inquiry, and a strategy defined pursuant to a wide range of says from members of society involved in this matter; though not waiving the ultimate responsibility that our institutional entitlement conveys. Nevertheless, attention was given to an array of opinions –taken into account and acknowledged–, regardless of their more or less consistent courses, and based on various reasons and viewpoints, where some implied more exclusivist aspirations, and others showed a greater comprehension of the diverse and changing features of the phenomenon.

In general, problematic substance use ends up affecting human health, becoming a pathology, so the issue necessarily implies the involvement of the National Health System. Such should be our baseline for tackling problems derived from drug use, in addition to requirements derived from a comprehensive health perspective, including the reinforcement of social protection nets that involve and call for the participation, in the field, of institutions with specific responsibilities.

With the idea of acting beyond the mere effects on individual health, our institutional perspective was assumed on the basis of the following aspects, among other things:

- Acknowledgement of the international nature of the phenomenon that affects the population's safety and entails a head-on battle against the illegal trafficking of substances and the laundering of assets, all of which require regional and international cooperation and exchange.
- Active participation in international debate on strategic orientations, and promotion of ongoing aggiornamento, with the change of paradigm regarding substance use.
- Awareness of the fact that, only informed decision-making may lead to genuinely free decisions, particularly among the youth.
- Allowing for the educational system to become involved, as it plays a substantial role in promoting resilient living habits and preventing problem drug use.
- Acknowledgment that the problem of drug use shows a greater degree of prevalence among inmate population, and among homeless individuals or those with mental health issues or with a history of institutionalized childhood.
- Bearing in mind that, their relationship with drugs has proven increasingly more stigmatizing for women, thus hindering awareness on the issue and turning their search for help even more complicated.

By virtue of the above and several other factors –while also taking responsibility for the magnitude and particularities of this trying situation and its numerous implications at the individual, family and community levels–, and

given the complex nature of the subject, as of 1988, Uruguay has supported and encouraged inter-institutionalization.

Considering the shared interest of several State agencies in this respect, the option has been to go for joint actions and collective implementations, including initiatives and resources from all involved, and to seek convergent strategies and unified actions towards common goals. This implies a mature rationality that goes beyond individual institutional actions, as well as selective and solitary actions based on the dominant possession of resources, or on the presumptuousness of monopolistic competence, skills or knowledge.

Much to the contrary, the strategy calls for and stipulates a formal and profound commitment of all institutions, with coordination of efforts and shared resources in order to define a network to be deployed throughout the national territory. Such network is not a substitute for what is strictly health services but rather a supplement for them, which is also structured with levels of service, with specific objectives in each case.

Responding to the various stages in the health-disease process implies varied levels of complexity and diverse resources available, and every individual with a drug use disorder requires personal and specific solutions to be offered through different health service levels. Therefore, in order to maximize benefits that are not immediate, the network must be stable through time and it must resist the vicissitudes and fluctuations of the political and institutional processes in other areas.

Mr. Daniel Radío (M.D.)
Secretary General of the
National Drug Council

Mr. Rodrigo Ferrés (L.D.)
Assistant Secretary of the President's Office
President of the National Drug Council

Introduction

The 2021-2025 National Drug Strategy (“END” as per its Spanish acronym) is the outcome of a broad consultancy process and inter-institutional work with a variety of stakeholders related to the issue of drugs. It was devised with a combination of stages, incorporating the contribution of several government agencies (ministries, provincial drug councils –“JDD” as per its Spanish acronym–, and local drug councils –“JLD” as per its Spanish acronym–, among others), and of civil society and academicians, specifically in relation to the design, implementation and/or assessment of the drug policy.

Uruguay’s precedents concerning national drug strategies included a comprehensive vision of drug policies, with an outlook on human rights and a model developed for market regulation and control with a risk management and harm reduction perspective. Input was taken from lessons learnt at implementation assessment instances carried out by academicians and by the National Drug Secretariat (“SND” as per its Spanish acronym).

In its fourth edition, the purpose of Uruguay’s strategy is a renewed State commitment to guarantee a comprehensive response to the needs of society as a whole in relation to drugs, besides the coordination of all stakeholders involved and responsible for implementing it.

In such sense, health becomes a priority from an integral perspective, with quality standards, and the backup of scientific evidence.

The approach, as well as the principles and strategic guidelines are expressed through five components: Institutional Strengthening; Integral Health; Market: control and regulation measures; Justice and Coexistence; and International Relations and Cooperation.

The supporting Action Plan is founded on inter-institutional commitments allowing the due implementation with goals and indices defined, respectively assessed and monitored.

At the international level, the strategy is structured according to guidelines and commitments undertaken at the various instances where the country has participated.

Institutional framework for the drug policy

Uruguay's lengthy experience in drug policies has been enriched by the gathering of lessons learnt and knowledge at both the institutional and technical levels.

The National Drug Council (“JND” as per its Spanish acronym, hereinafter “NDC”) –the directing body in this field– is institutionally capable of promoting top level consensus and guaranteeing consistency for the inter-institutional application required.

It originates in the National Council for the Prevention and Repression of Illegal Trafficking and Abusive Drug Use, created within the Presidency of Uruguay on 13 July 1988 by way of Decree-Law No. 463/988. The name “National Drug Council” and the creation of the “National Drug Secretariat” were established on 28 October 1999 through Decree-Law No. 346/999. On 7 June 2000, Decree-Law No. 170/2000 defined its objective and current organizational members, with the Assistant Secretary of the President's Office as President, accompanied by nine Undersecretaries of relevant Ministries, along with the Secretary General of the National Drug Secretariat, and the National Secretary for Prevention and Fight against Money Laundering and Terrorism Financing.

NDC'S Mission:

- To define drug policy guidelines and to guarantee the implementation of actions corresponding to the various State agencies involved.

NDC'S Vision:

- To become the political scenario at the highest governmental level with the inter-institutional articulation necessary for implementing the national drug policy.

The various realities throughout Uruguay's territory are also treated at inter-institutional spheres such as the provincial and local drug councils, created by

means of Decree-Law No. 84/2010 on 25 February 2010, with adjustments to their legal frameworks established on 4 December 2012 by way of Decree-Law No. 387/012.

The National Drug Secretariat is the State's specialized agency on drugs, devised to provide high-quality support and technical assistance for the policy's design, implementation and assessment, and its execution with inter-institutional articulations.

Principles

- **Human Rights:** Inclusion of human rights principles and instruments as part of the drug policy. Respect for rights and guarantees in all aspects.
- **Egalitarian Development:** Commitment to human development and dignity, focused on vulnerable population. Crosscutting inclusion of gender perspective.
- **Comprehensiveness and Balance:** Complex, multi-dimensional and crosscutting approach.
- **Joint Responsibility:** Strengthening of drug strategy with cooperation at multi-lateral scenarios and at the global level.
- **Democracy:** Active participation of the community and civil society in the policy's definition and the promotion of the debate on drugs, including all viewpoints.
- **Scientific Evidence:** Interventions based on scientific evidence and oriented at the quality, efficiency and sustainability of actions.
- **Transparency:** Availability of public information and accountability.

Approach

In Uruguay's 2021-2025 National Drug Strategy, the issue of drugs is deemed as a complex and dynamic phenomenon that involves various areas and parameters regarding the nature, causes, development and approach associated with it. It requires the design of customized answers to sufficiently cover the needs of society as a whole.

A risk and harm reduction model is a response for a comprehensive, balanced and multidisciplinary approach focused on individuals, communities and their bonding, to cover the subject's various dimensions. It allows the design of strategies for anticipating, preventing and reducing risks through short, mid, and long-term goals, enabling a diversity of interventions. The scope ranges from regulated markets to personal health care, and consideration of how individuals bond to drugs. In this regard, the risk and harm reduction model includes the possibility of establishing abstinence as a therapeutic objective.

The accomplishment of this approach implies cooperation between supplemental sectors at the local, provincial and national levels, and in the international context, for combining the various dimensions of the phenomenon and to cover the sanitary, social, legal, economic, cultural, and environmental spheres.

Access to universal health care is sought with a comprehensive and multi-mode vision, based on the acknowledgement of various needs derived from therapeutic and non-problematic use of drugs; as well as problem drug use.

In this regard, the concept of coexistence aspired is based on the acceptance of diversity and the overcoming of social stigmas, which require a number of coordinated and crosscutting answers focused on the needs of vulnerable populations.

The model for drug governance policy sought requires a balance of State interests and contributions, with those of civil society and the public sector, and a policy articulated and interwoven through society's economic, social and cultural development processes.

The actions developed are based on a concept of territory deemed as the vital space for the social coexistence processes of individuals that give way to, and explain, everyday life and generate opportunities for contributing to local collective development. Therefore, the roles played by local stakeholders – such as provincial and municipal authorities, civil society’s organizations and local enterprises, among others– become necessary through planning and participating mechanisms for the implementation required.

Among its components, the National Drug Strategy also includes the generation of answers for contingent situations such as sanitary and/or social emergencies.

Components

Institutional strengthening

The scope and complexity of aspects considered within national drug policies demand the active and coordinated participation of multiple stakeholders, implying competences, dedication and resources extended throughout the whole country.

In this regard, the role of the National Drug Council –as the country’s authority on policies and articulator of the inter-institutional network that implements the National Drug Strategy– is of the essence for attaining successful results. It implies in-depth construction, implementation and direction processes for the policy, and the promotion of new instances between Ministries for further dialog, design and coordination.

The drug policy’s coordination and articulation calls for the empowerment of the National Drug Secretariat as a technical body of the National Drug Council, in addition to the provincial and local drug councils, with an updated institutional and legal framework, and up-to-date competence and purposes for the effective fulfillment of its designated role.

Besides central administrative agencies, other significant and decisive organizations for successful policies include the Legislative and Judicial Powers of Government, as well as the provincial and local authorities, the education system, the network of health services, corporations, trade unions, and civil society institutions. They constitute a social network for supporting policies from a standpoint of dialog, shared liability, and governance.

The strategy is oriented at the effective development and empowerment of politically crosscutting lines of action that, in relation to research, communications, training, decentralization, and assessment, consolidate the cycle’s implementation processes based on scientific evidence and on quality interventions. The institutional strengthening of the Confiscated Goods Fund (“FBD” as per its Spanish acronym), the National Drug Network (“RENADRO” as

per its Spanish acronym)¹ and the Drug Observatory of Uruguay - DOU (“OUD” as per its Spanish acronym) is also a fundamental line of action of the National Drug Strategy, for consolidating technical responses in these specific areas.

Strategic guidelines

1. To strengthen the policy design processes and the National Drug Council’s directing role in what refers to drug policy, with a profound inter-institutional work of the ministries involved, and a strong promotion of articulated actions involving other public agencies significant for that implementation.
2. To develop shared lines of action and empower the multiple stakeholders involved in the National Drug Strategy’s implementation (State agencies, municipal and local governments, educational institutions, civil society organizations, and workers unions, among others).
3. To strengthen the National Drug Network, considering norms and regulations applicable in this field, to ensure universality, accessibility and the inter-institutional articulation of services.
4. To consolidate the National Drug Secretariat’s institutional framework and resources to better fulfill its purposes in the fields of assistance, articulation and supervision of the actions implemented, by means of the following crosscutting central themes:

4.1. Communication

Social media dissemination of the broader approach of drug policies, and development of social communication processes for both the general public and different specific groups, founded on assertiveness, social listening, and customized contents. Promotion of the different

¹ Renadro (National Drug Network): understood as the group of initiatives for the sensitization, health promotion, prevention, assistance, treatment and reinsertion of drug users. Its comprehensive conception includes public and private services within the National Health System. At the public level, drug-related assistance has been supplemented with an administrative trust fund that enables sustained development of an assistance and treatment model that includes a network of differentiated devices at the three levels of health care services, meant to guarantee access to integral health by individuals with problem drug use.

stakeholders' commitment and solidarity actions, with in-depth information and comprehension among citizens in relation to the issue, including prevention, treatment and social integration programs, in addition to making available all scientific evidence generated.

4.2. Research

Generation of scientific evidence for policy design and implementation, privileging the epidemiological surveillance carried out by the Drug Observatory of Uruguay as part of its duties, and strengthening its articulation with other entities from the public and private sectors, as well as with international organizations and civil society, towards developing research and studies.

Formalization, development and promotion of information systems. The Early Alert System for drugs is a key tool in monitoring high-risk consumption and adulterations, and for real time detection of new psychoactive substances. The treatment centers registry is a source of reliable, precise and up-to-date information on the supply and demand situation relative to treatment.

4.3. Monitoring and assessment

Pursuit of mechanisms in the planning, monitoring and scientific assessment of drug policies -in relation to programs, projects, services and actions- deemed as generators of substantial evidence for ongoing improved management. All in coordination and cooperation with relevant domestic and international organizations.

Furthering the implementation of a Quality Management System to guarantee compliance with international parameters in the approach towards drug issues, in addition to the effectiveness and efficiency of network activities.

4.4. Decentralization

Reinforcement of the policy's decentralization and territorialization, with stronger provincial drug councils and the creation of local drug councils. Fostering of articulated actions and resources by the three

levels of government. Promotion and support of provincial plans devised and applied to local situations diagnosed, with participative processes in interventions with communities.

4.5. Education

Promotion of education and training aimed at professionals, technicians and other profiles from the various fields implied, with an articulated and consistent set of interinstitutional actions to encourage transmission of knowledge, exchange, analysis of experiences, best practices, and innovative critical thinking.

Development of strategies within the university and/or college environments to generate specialized graduate and post-graduate educational options aimed at professionals working in this area.

Extension of actions oriented at including the drug issues in the basic and permanent curricula of professional training, for strategic areas related to education, society, health care, law, and public safety.

4.6. Confiscated Goods Fund

Strengthening of the legal-institutional framework of the Confiscated Goods Fund, with consolidated processes regarding the management, recovery and liquidation of properties and assets, with transparent processes for resources allocation to the drug policy.

Consolidation of joint work with institutions involved in the property administration and recovery process, and formalization of institutional commitments to develop and reinforce the asset management and data system.

Integral health

Drug use is considered at the light of its complexity and dynamism, and taking into account the promotion of health, prevention, treatments and social integration of individuals with problematic drug use and their communities, as essential components. In this regard, drug policies are part of a viewpoint on public health that includes social, educational, sanitary, and economic aspects, among others.

The social aspect implies the expression of drug problems within the various sectors of society, and gender inequality and its expression in different territories and communities.

The 2021-2025 National Drug Strategy aims at developing a comprehensive system for promoting prevention and health care, in addition to achieving an integral system for assisting and providing treatment in relation to drugs. This represents advances in supplementing the National Health System (“SNIS” as per its Spanish acronym) and different social protection policies, by directing the different services and strengthening inter-institutional aspects within the National Drug Network.

Special focus is placed on improving the access of individuals to services –considering an outlook of gender and cross-referencing between different analysis categories such as ethnic-racial precedence, socio-economic level, sexual diversity, and generations, among others–, as well as on the consistency of sectorial policies and their effectiveness. Within such framework, favorable conditions are sought for the availability, accessibility, sustainability and quality of the various interventions for assistance, treatment² and social integration, all adapted to the needs and particular features of the individuals with problematic use of drugs and their communities.

The issue of problem drug use is considered from a comprehensive concept that includes various perspectives and disciplines, oriented at guaranteeing the exercise of the right to be in good health. Such perspectives range from community proposals to hospital and clinical proposals, considering individual, group, family and multi-family interventions.

2 Defined by way of Decree-Law No. 274/2013, with regulatory code still pending.

To that end, the early detection and prevention of higher-risk consumption is necessary, along with the promotion of psycho-social competence, and healthy life habits and behaviors, including aspects such as sports, physical activity and recreation.

The perspective of social equity implies the guarantee for assistance, treatment and access to quality health services, with the identification and development of customized strategies, both at the individual and group levels, and specifically in cases of vulnerable groups that require specialized approaches, like teenage population, inmates, and individuals suffering from related pathologies, among others.

In the teenage population, the biological, relational, environmental, and learning conditions typical of this group have particular effects that require a specific treatment, ranging from prevention to specialized treatments. The main focus is on actions aimed at augmenting the sense of risk and at delaying the initial age of consumption.

The objective is to guarantee the right to be in good health in all possible dimensions, within a social integration context for individuals and communities, aiming at social equity. The scope includes egalitarian access to health care, education, employment, and social integration, in a coordinated manner, with the goal of overcoming disadvantages existent in vulnerable populations.

The complexity of health-illness-assistance processes calls for relational models to enable the simultaneous understanding and treatment of multiple aspects. In this context, the State's role is to create conditions to guarantee full exercise of basic rights.

Likewise, the active participation of civil society and communities is encouraged, in order to facilitate dialog instances and the definition of a common agenda.

Strategic guidelines

1. To develop an overall prevention system to include strategies for influence, development of competence, and control, protection and environment,

considering the various populational universes, towards full, selective and indicated prevention, in the contexts relative to education, community, family, workplace, sports and culture. In coordination with key stakeholders, to implement projects focused on adolescents and other subgroups of the population.

2. To develop a comprehensive drug assistance and treatment system to include all social actors responsible for different services in the drugs sphere, such as civil society organizations, State agencies, and the private sector, among others; while also strengthening their particular direction mechanisms.
3. To define the design, implementation and inter-institutional coordination of national plans for specific regulations indicated in the Law referred to the consideration of substances: tobacco, cannabis, alcohol, psychotropic substances and other drugs; and to generate articulation actions with the 2020-2027 Mental Health Plan.
4. To develop and implement quality management systems and the continued improvement of the prevention, assistance and treatment systems.
5. To establish the National Drug Network as a model system for drug assistance in the public sphere –by means of information and referral devices, outpatient, residential, rehab, and community centers– in addition to proof-based strategies aimed at the needs of specific populations such as women, men and women with children, the children of drug addicts, families, and inmates.
6. To strengthen social integration actions aimed at reducing vulnerabilities associated with problem drug use by accessing social protection programs, particularly those related to education, culture, housing, and health, and adapted to the possibilities and needs of individuals and their communities, in coordination with sectorial policies.

Market: control and regulation measures

The legal alcohol, tobacco, cannabis and psychoactive-drugs markets represent opportunities for developing policies oriented at promoting the health and care of individuals and communities. The legal framework of production, distribution, communications, sales and consumption provides de State with design, supervision and control tools for facilitating positive interventions, which may build –on the basis of rights conceived– spaces to enable the information, reflection and protection of individuals.

The National Drug Strategy is oriented at advancing in the development and update of the strategic components of each regulatory framework. The regulatory model for the cannabis market implies an organizational review to broaden the legal market's space with a substantial impact on the illegal market, based on the protection of users' rights and health, in addition to boosting this policy's information and prevention programs.

The Regulatory Institute for Cannabis Control (“IRCCA” as per its Spanish acronym) is in need of institutional strengthening, which must include the roles and competence of the organizations that the Institute comprises. This will enable the development of the legal market at both the local and international levels, by means of industrial and medical components subjected to quality production, in addition to research development.

The legislation concerning the alcoholic beverages market includes relations for advertising, promotions, sales, and inspections, as well as the implementation of regulatory and controlling actions, and the prevention of problematic use.

In what concerns the tobacco control policy, there is a need for increased public information on the adverse effects of consumption and related diseases, in addition to the extension and maximum use of the tobacco cessation programs and services, available through the National Health System.

Greater articulation and synergy levels are required by the strategic components of these three regulatory frameworks, to unite them within the same perspective of rights and in preserving the freedom of each individual and of others, as well as for the attainment of health care and social goals. The

reinforcement and articulated work of controlling and inspecting bodies and civil society are also of the essence.

The market of psychotropic drugs should imply greater controls to prevent abusive uses in various areas such as health care contexts and the private use of these drugs, while avoiding deviations to the illegal market.

All actions for preventing, detecting and punishing asset laundering represent a core component in drug policies. While depriving benefits of illicit trading strongly affects criminal organizations, it also protects the financial market and prevents the development of corruption. In this regard, there is a need for a stronger Confiscated Goods Fund, including the management of its asset administration, recovery and liquidation mechanisms, as well as the transparency in processes required for the allocation of those resources to policies relative to the prevention, treatment and control of drug-trafficking.

In observance of international agreements, all mechanisms aimed at preventing and punishing the deviation of precursors and chemical substances towards the illicit production of drugs will be maintained. Additionally, the availability of controlled substances to be applied for therapeutic and scientific purposes will be guaranteed.

The National Drug Strategy is meant to develop a comprehensive and balanced approach of police prevention policies, as well as for investigation and repression; all in strict respect of human rights, seeking an effective, global and continued impact on illicit drug trafficking organizations, and on those dealing with asset laundering, corruption and organized crime.

Particular focus is set on the actions tending to battle the association of such drug crimes with human trafficking and trade, sexual exploitation and gunrunning, apart from promoting the protection of more socially vulnerable individuals.

From a comprehensive conception of crime policies, the consideration of detention center issues is a priority to contribute to the implementation of effective processes oriented at rights exercised and opportunities for the social reintegration of inmates, and more specifically women, among whom there is a greater percentage of individuals imprisoned due to drug-related crimes.

Strategic guidelines

1. To increase monitoring and assessment of policies relative to market regulation, by means of a system based on validated, agreed, standardized, comparable and reliable indices.
2. To reinforce inspection and controlling mechanisms relative to the production and supply of psychoactive substances as part of the framework of market regulation models for alcohol, cannabis, tobacco and psychotropic medication, with strengthened agencies specialized in the field.
3. To foster the production of medical and industrial cannabis for empowering the local and international markets with quality products, accompanied by the development of scientific evidence.
4. To guarantee access, availability and use of controlled substances for medical purposes and for scientific research, including regulatory updates.
5. To make control measures established stronger, towards a better prevention against the deviation, from the legal market to illegal drug production, of chemical substances and precursors.
6. To increase measures required to control the market of pharmaceutical products, their illegal trade and their use in the production of illegal psychoactive substances.
7. To expand policies –including net worth investigations, seizing and confiscation of assets of crime organizations– towards preventing and battling asset laundering.
8. To ensure the enforcement of corruption penalties and prevention measures, particularly in cases of public servants.
9. To strengthen policies to prevent, interdict and punish illicit drug trafficking and related crimes, particularly organized crime, public corruption felonies, asset laundering, gunrunning, and human trafficking.
10. To define query, assistance, training and cooperation mechanisms for implementing drug policies with the Judicial Power of Government, Public Prosecutors and Attorney General, the Ministry of Internal Affairs, academic institutions and other organizations related to the judiciary, in order to augment information systems.

Justice and coexistence

Justice is conceived from a perspective of human rights and considering the protection of individuals and their communities in relation to their access to opportunities and to the egalitarian distribution of penalties derived from the enforcement of drug policies. The disadvantageous social conditions of vulnerable groups must be taken into account in their links to activities that relate to drug micro-trafficking. In urban areas, more marginalized and with a greater structural violence and networks of illicit activities –both emerging and consolidated–, the drug-related illegal economy has an increasingly favorable breeding ground.

The concept of coexistence relates to the quality of interpersonal relations and the acceptance of others different from us, and it aims at reaching agreements amidst diversity. Under such perspective, policies are oriented at the de-construction of stigmatizing social stereotypes and representations, while favoring tolerance and contributing to reduce discrimination against drug users. The feedback for this concept is the notion of social coexistence, obtained from the fabric of society and its relations, intervened by political, religious and cultural aspects and the use of public space, among others, all of which influence the construction of citizenship and community.

The promotion and fostering of actions for the social integration of socially vulnerable groups is deemed appropriate from an inter-sectorial perspective, focused on individuals investigated, accused or imprisoned for narcotic-related crimes, and on homeless individuals, migrants and those with emerging difficulties.

Evidence exists about the close relation between homeless individuals and the consumption of narcotic substances. The identification of this social trend implies subjective and collective transformations that go beyond tutelary dynamics, for there are several problematic factors –such as inequality before the Law, social disentangling and forced mobility, among others– surrounding the situation of homelessness.

As they become fragile, the communities affected by illicit drug trafficking, and more specifically by micro-trafficking, require the implementation of social

and economic promotion and development programs. A possible strategy for responding to this issue lies in the model for Sustainable and Comprehensive Alternative Development (“DAIS” as per its Spanish acronym) – by the Inter-American Committee for the Control of Drug Abuse (CICAD-OAS).

Significant differences appear among individuals convicted for drug-related crimes, where women represented a greater proportion than men in all the years recorded.³ And it was revealed that the more vulnerable groups are over-represented within detention centers.

The strengthening of institutional processes oriented at tolerance and peaceful coexistence, also articulated with communities at all territorial levels, is deemed an imperative line of action.

Strategic guidelines

1. To generate knowledge and promote the exchange of best practices in this area, for further developing program design and implementation, based on scientific evidence.
2. To insist on processes that involve homeless individuals in relation to everyday conditions, considering mobility habits, ways of dwelling in public spaces, and coexistence, bearing in mind the significant prevalence of drug consumption and mental health issues.
3. To develop specific strategies and programs to intervene communities at a higher-risk in the culture of illegality and exposed to committing drug micro-trafficking crimes.
4. To reinforce existing services in vulnerable environments, and to include, in territorial programs and networks, the specific interpretation of how the imprisonment of family members and/or significant role models affects the lives of children and adolescents, so that this dimension is included in the overall approach.

³ NDC – DOU, 2019. Monitoring and assessment of Law No. 19,172: Fair enforcement of the Safety and Coexistence Law.

5. To sensitize and train the different actors from the law system (judges, police, etc.), health services, community organizations and academicians in relation to up-to-date information and best practices for dealing with the issue of problem drug use, from a cultural perspective of tolerance and peaceful coexistence.
6. To promote measures alternative to imprisonment and probation, through the development of plans and programs oriented at educational, social and employment integration, in recognition of the more vulnerable populations involved in drug trafficking, and more specifically females involved in micro-trafficking.

International relations and cooperation

Uruguay's foreign affairs policy concerning drugs is based on principles relative to:

- respect and promotion of the rules of law, for guaranteeing individual and collective rights;
- legal equality of States as the foundation of shared and common responsibility;
- self-determination of every nation's people in accordance with the governing laws, every State's territorial sovereignty and integrity, non-intervention in internal affairs;
- protection of the environment and respect for human rights as the ultimate aim and foundation of a comprehensive vision of a drug policy;
- preservation of peace, and the banishment on the application of force or related threats;
- peaceful solution of disputes as the main tool for preserving peace and coexistence among all nations;
- multilateralism and cooperation for treating the global aspects of drug issues in the world;
- enhancement of the United Nations' System as the central scenario for generating peace, dialog, consensus and joint responses aimed at unified actions within diversity; and observance of international law as the referential framework to guarantee relations among States.

The country has renewed its commitment to strengthening communications, cooperation and information exchange with other countries in order to face the negative effects of drugs worldwide, applying a comprehensive and balanced interdisciplinary approach, on the bases of scientific evidence.

Uruguay continues to preserve its open and continued dialog with different States and international agencies and institutions, as well as its active participation in the regional and world arenas, in pursuit of an open debate in the contexts of MERCOSUR, GRULAC, CICAD-OAS, CELAC-EU and UNODC, in addition to other agencies that are part of the United Nations' System, such as the Human Rights Council, WHO-PAHO, UNAIDS, and UN Women, among others.

As well, the South-South and triangular cooperation is to be reinforced along with the bilateral cooperation for the specific approach of border zones.

For the case of possible sanitary emergencies at the regional or world levels, the exchange of knowledge and experience will be prioritized, while defining cooperation contexts for the approach and activation of different stakeholders.

Strategic guidelines

1. To coordinate and promote Uruguay's political and technical participation, at the international level, on the issue of drugs. To maintain the country's active participation through the various instances and multi-lateral and regional cooperation organizations in order to strengthen international cooperation. To maintain and pursue international cooperation agreements and programs with other countries aimed at developing legal cooperation, technical assistance, and international operations in relation to drugs.
2. To seek the effective integration of human rights in the international framework of drug policies.
3. To continue promoting the debate on policies, and their review, in the approach of the complexities of problem drug use.
4. To promote and reinforce international cooperation in relation to medical cannabis and industrial hemp.
5. To further develop bilateral cooperation in the generation of actions for the border zones, and to intensify the South-South and triangular cooperation among the various stakeholders in this issue, all aligned with the UN's Sustainable Development Objectives.

Table 1: Contribution to Sustainable Development Objectives (SDO) United Nations

Components of the 2021 – 2025 National Drug Strategy					
SDO	Institutional Strengthening	Integral Health	Market: control and regulation measures	Justice and Coexistence	International Relations and Cooperation
SDO 3: Health and Welfare		●	●	●	
SDO 4: Quality Education		●			
SDO 5: Gender Equality	●	●	●	●	●
SDO 10: Reduction of inequities		●	●	●	
SDO 16: Institutional peace and justice	●		●	●	●
SDO 17: Alliances to attain objectives	●	●	●	●	●

Table 2: Contribution to recommendations by the Special Session of the United Nations’ General Assembly - UNGASS 2016

UNGASS Recommendations	Components of the 2021 – 2025 National Drug Strategy				
	Institutional Strengthening	Integral Health	Market: control and regulation measures	Justice and Coexistence	International Relations and Cooperation
1. Reduction of demand and related measures	●	●	●	●	
2. Availability of substances			●		
3. Reduction of supply and related measures	●		●	●	
4. Inter-sectorial aspects	●	●	●	●	●
5. International inspections			●		●
6. International cooperation	●	●	●		●

La Estrategia Nacional de Drogas (END) 2021-2025 es el resultado de un amplio proceso de consulta y trabajo interinstitucional con diversos actores vinculados a la temática de drogas. Se realizó en varias etapas integrando los aportes de diversos organismos gubernamentales (ministerios, juntas departamentales y locales de drogas, entre otros), así como de la sociedad civil y la academia, relacionados con el diseño, implementación y/o evaluación de la política de drogas.

The 2021-2025 National Drug Strategy ("END" as per its Spanish acronym) is the outcome of a broad consultancy process and inter-institutional work with a variety of stakeholders related to the issue of drugs. It was devised with a combination of stages, incorporating the contribution of several government agencies (ministries, provincial drug councils –"JDD" as per its Spanish acronym–, and local drug councils –"JLD" as per its Spanish acronym–, among others), and of civil society and academicians, specifically in relation to the design, implementation and/or assessment of the drug policy.



**Junta Nacional
de Drogas - Uruguay**
Salud, Libertad y Solidaridad

Ministerio del Interior
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio del Educación y Cultura
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Turismo
Ministerio de Desarrollo Social
**Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado
de Activos y del Financiamiento del Terrorismo**
Secretaría Nacional de Drogas